

vilizaciones de 2017 —la mayoría a manos de cuerpos de seguridad del Estado— no han recibido el trato esperado por parte del MP, como lo puso en evidencia el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre este punto, y más aún, la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de iniciar una averiguación preliminar de Venezuela al considerar que los crímenes cometidos durante las protestas merecen una investigación realmente independiente.

CORRUPCIÓN

Entre las pocas cifras que ofreció Saab se encuentra el haber señalado que desde agosto de 2017 se han ejecutado 551 acusaciones por casos de corrupción, entre las que se cuentan los más altos cargos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Detalló que durante los cinco meses de su gestión se logró apresar a exministros de Petróleo y expresidentes de Pdvsa, mientras que acusó a Ortega Díaz de dirigir una red de corrupción dentro de la estatal petrolera y sobreseer 80 % de las causas vinculadas a los delitos cambiarios.

Si bien Saab alardeó que solo bajo su gestión se está haciendo justicia en los hechos de corrupción, es preciso recordar que la estructura del sistema de justicia que ha venido configurando el Gobierno (magistrados exprés, destitución del vicesfiscal, provisionalidad de los jueces) le ha jugado a favor para impedir que las averiguaciones en contra de los funcionarios prosperen y solo lo hagan cuando al propio Gobierno le convenga.

Precisamente, uno de estos casos se refiere a Pdvsa, ya que el TSJ en 2016 bloqueó una investigación de la Asamblea Nacional sobre la petrolera y en 2017 ordenó hacer una indagación contra el diputado Freddy Guevara por haber tratado de notificar al exhombre fuerte de la estatal, Rafael Ramírez, sobre esa averiguación.

JUSTICIA MILITAR

El fiscal general no dejó pasar el tema de la justicia militar, al indicar que 57 causas civiles que estaban siendo llevadas por órganos castrenses volvieron a su juez natural, pero la realidad es que la cifra informada no es representativa frente a los centenares de casos recopilados.

De acuerdo a las ONG Human Rights Watch y Foro Penal, durante las protestas de 2017 los civiles detenidos y puestos a la orden de órganos castrenses sumaron 757, y aunque la ilegal ANC ordenó devolverlos a la jurisdicción civil, lo dicho por Saab evidencia que hay una brecha enorme entre el número de particulares puestos a las órdenes de los tribunales civiles y los que siguen siendo procesados por la justicia militar, diferencial por el que Saab y el Poder Judicial deben responder.

¿Y A TI VENEZOLANO, CÓMO TE AFECTA?

La presentación de Tarek William Saab ratifica que el país vive una severa crisis institucional, ya que la Fiscalía General, organismo cuya responsabilidad es velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, está a cargo de un funcionario nombrado bajo el amparo de una instancia y un procedimiento fraudulento, ajeno a la soberanía popular a la que debería servir.

Por ello, aunque la difusión del informe de gestión es una obligación constitucional, la actual administración del Ministerio Público sigue sin cumplirla, pues la información ofrecida por su titular fue seleccionada atendiendo a intereses políticos, y para hacer ver que se está cumpliendo con las funciones del organismo cuando, por el contrario, las pocas cifras ofrecidas dejan ver una brecha entre lo que necesita el país y lo que se está haciendo. En tal circunstancia, solo gana el poder y perdemos todos los ciudadanos.



Las medidas contra los productores nacionales

La reciente detención de doce personas vinculadas a la producción pecuaria en el estado Apure retrató el debilitamiento de los derechos del sector productivo nacional privado, debido al autoritarismo con el que ejerce el poder el Gobierno nacional y que ahora se ha trasladado a los ámbitos regional y municipal.

Cuatro decretos emitidos por las gobernaciones de Guárico, Barinas, Apure y Cojedes escalaron las medidas contenidas en leyes y resoluciones aprobadas en el pasado por el fallecido Hugo Chávez, y luego ratificadas por el presidente Nicolás Maduro, todas orientadas a hacer-

se del control de la producción nacional a través de la regulación de precios, fijando cuotas de fabricación de rubros básicos, implementando fiscalizaciones o aplicando “compras” que en realidad se parecen más a confiscaciones.

En este caso, las recientes acciones establecieron obligaciones al sector pecuario, relacionadas con la venta de hasta 50 % de su producción a las autoridades regionales o locales a precios impuestos por estas últimas.

Debe destacarse que ni las autoridades regionales ni las municipales tienen competencia alguna para imponer estas restricciones a los productores, por lo que tales actos, aunque se disfracen bajo el nombre de legales, son simples arbitrariedades carentes de sustento legal alguno.

Sin embargo, estas medidas no son más que otro reflejo de la política de control de la actividad productiva impulsada por los gobiernos de Chávez y Maduro, que ha derivado en atropellos en contra de los derechos de quienes producen en el país, ya que además de ser sometidos a severas fiscalizaciones para corroborar el cumplimiento de la regulación de precios y estar obligados a enviar la mercancía solo a sitios autorizados, ahora debían responder a exigencias adicionales a las que impone el Ejecutivo nacional que implicaban ceder parte de su producción a precios de *gallina flaca*.

La irregularidad de la situación fue reconocida indirectamente por el propio Gobierno, ya que ante lo ocurrido en las regiones llaneras, resolvió impedir que las autoridades regionales y locales intervinieran en la distribución de alimentos.

La decisión le correspondió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en su carácter de jefe del Comando de Abastecimiento Soberano, quien emitió una resolución en enero pasado con la que “exhortó” a gobernadores y alcaldes a que dejaran de aplicar la retención de rubros alimenticios, pues estas acciones son atribuciones exclusivas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

Lo dicho pone de manifiesto la anarquía que reina en el Estado venezolano, donde alcaldes y gobernadores usurpan competencias que no tienen, mientras el Poder Ejecutivo, que no conoce límites para reprimir manifestaciones pacíficas, en este caso simplemente “exhorta” a las autoridades antes indicadas a que dejen de hacer lo que ilegalmente estaban realizando.

No hace falta ser adivino para saber a qué grupo político pertenecen esos alcaldes y gobernadores y la razón de este tratamiento tan tolerante ante tan manifiesta arbitrariedad.

Así pues, tenemos que lo señalado pone de manifiesto el abuso institucionalizado que reina en el país y que llevó a que las autoridades locales y regionales desoyeran la orden de Padrino López, procediendo a ejecutar medidas calificadas de confiscatorias por los afectados. Y lo

son en la medida en que el “precio” impuesto sea menor al costo de los mismos, imponiendo a los productores producir a pérdida, afectando más todavía la mermada producción de alimentos del país.

En el caso de Apure, la situación desencadenó la detención temporal de dirigentes gremiales y productores, quienes se negaron a entregar toneladas de queso a una de las alcaldías de esta entidad que pretendía “comprarles” el producto lácteo casi a un tercio del valor establecido.

EFFECTOS NEGATIVOS

Lo ocurrido en estas regiones forma parte del mismo modelo intervencionista que ha adelantado el proceso revolucionario que inició Chávez y que continúa Maduro, basado en un esquema de regulaciones que si bien le ha garantizado un férreo control del aparato productor ha sido a costa de la progresiva reducción de la producción.

Esta forma de gobernar ha llevado a que el país padezca escasez estructural de rubros básicos como alimentos y medicamentos, pero además de otros prioritarios como materia prima agrícola e industrial, que ha obligado a la población a modificar sus hábitos de consumo, realizar largas colas para adquirir una mínima cantidad de productos o estar imposibilitado de comprar por el avance inflacionario, que hasta febrero acumula un alza anualizada de más de 6.000 %.

Un aspecto que además se debe considerar es la arbitrariedad con la que se ejerce el poder en Venezuela, agudizando la indefensión de la población, pues pareciera que quienes tienen circunstancialmente un cargo por designación o elección popular hacen lo que quieren, pasando incluso por encima de las directrices del Gobierno central o las normas.

¿Y A TI VENEZOLANO CÓMO TE AFECTA?

El caos institucional que vive Venezuela se muestra en su total esplendor con lo ocurrido en Apure, pues aunado al hecho de que los gobiernos locales tomaran para sí competencias ejecutivas, ignoraron resoluciones emanadas por una instancia decretada por la presidencia.

El descrito es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los controles estatales a la economía han destruido la producción en Venezuela y han afectado a todos, sea por la carestía que existe, sea por el aumento incesante de precios, por lo que nadie puede decir que no haya sido afectado por una situación generada desde el poder y que no pretende modificar a pesar de sus desastrosas consecuencias.

*Observatorio venezolano de la justicia.